



TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN SALA CIVIL

Medellín, seis (6) de octubre de dos mil veintiuno (2.021)

RADICADO: 05001 31 03 011 2012 00132 02

Magistrado: JOSÉ OMAR BOHÓRQUEZ VIDUEÑAS

Proceso: Ejecutivo
Auto: 070.
Demandante: UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA.
Demandado: LAURA ALICIA LAVERDE DE BOTERO y otra.
Extracto: Solo una correcta vinculación y comunicación procesal salvaguarda los derechos de debido proceso, contradicción, y defensa; por lo que si no se ha procedido de conformidad, la actuación procesal está viciada de nulidad. Revoca.

ASUNTO A TRATAR

Se resuelve el recurso de apelación interpuesto por la codemandada LAURA ALICIA LAVERDE DE BOTERO, contra el auto calendado el nueve (9) de marzo de dos mil veinte (2.020), proferido por el JUZGADO TERCERO CIVIL DEL CIRCUITO DE EJECUCIÓN de Medellín, previos;

ANTECEDENTES

En el proceso ejecutivo de la referencia, habiéndose proferido auto que ordenó seguir adelante la ejecución, el cual se encuentra en firme¹, el asunto pasó a los juzgados de ejecución, ante los cuales el 26 de noviembre de 2.014, la codemandada LAVERDE DE BOTERO deprecó la nulidad de lo actuado alegando su indebida notificación.

¹ Auto del 26 de agosto de 2.013, folios 100-101 Cuaderno Principal.

Fundamentó la mencionada la solicitud de nulidad, en que la UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA, parte ejecutante, desde febrero de 2.011 sabía que ella, la demandada, reside en el municipio del Retiro (Antioquia), exactamente en el *“kilómetro 27, vía las Palmas Cerros de Fizebad Lote 60”*; pues constantemente departía en todos los espacios sociales y académicos de esa universidad, por lo que existía certeza sobre el lugar de su ubicación; sin embargo, la ejecutante intentó notificarla en la *“Carrera 43 # 14 – 30, apartamento 201, Medellín”*.

Afirmó que había informado a la demandante sobre su nueva dirección, y para probarlo deprecó pruebas testimoniales, así como considerar las documentales:

1. *“Formulario de autoliquidación de aportes”* y *“comprobante único de consignación”*;
2. Hoja de asistencia a la reunión denominada *“lluvia de ideas”* en la FACULTAD NACIONAL DE SALUD PÚBLICA;
3. Certificación expedida el 15 noviembre de 2.014 por la administradora de la Parcelación Cerros de Fizebad;
4. Liquidación dimanada del Centro Integral de Tránsito;
5. Factura de servicios públicos de EPM – contrato N° 7285556;
6. Envíos de la revista *“SEMANA”*, en donde dijo es suscriptora.

En esos términos, criticando la notificación que se surtió por aviso, adujo que no se aportó el auto que inadmitió la demanda, la subsanación y la segunda página del mandamiento de pago, lo que demuestra el incorrecto control de legalidad que incide en la vulneración a su debido proceso.

Previa recepción de testimonios², mediante providencia del 6 de noviembre de 2.015 se decretó la nulidad solicitada, para lo que se argumentó la existencia de un error que vicia la integración del contradictorio, en tanto el enteramiento de la codemandada LAVERDE DE BOTERO se hizo en la “*Carrera 43 # 14 – 30, apartamento 201, Medellín*”, dirección que no correspondía a su lugar de ubicación, pues esta había vendido tal inmueble desde el 9 de marzo de 2.012.

Agregó que no existe mecanismo que permita sanear las diligencias, pues el vicio recae sobre fue la primera actuación en la litis de LAVERDE DE BOTERO; así, las actuaciones se retrotrajeron para esa codemandada hasta la fase de notificación, considerándola enterada de la orden pago por conducta concluyente a partir del día siguiente a la fecha de ejecutoria de tal providencia.

Frente a esa decisión la ejecutante presentó los recursos de reposición y en subsidio apelación, por lo que en auto del 9 de marzo de 2.020 se repuso lo decidido, declarándose no probada la nulidad alegada, tras considerar que re- analizadas la prueba documental y testimonial, la notificación realizada a LAVERDE DE BOTERO es válida.

Se explicó que la citación para notificación personal fue enviada el 22 de septiembre de 2.012 a la dirección denunciada en la demanda, esto es “*Carrera 43 # 14 – 30, apartamento 201, Medellín*”, la que fue recibida por “*CARLINA GUTIERREZ BOTERO*”, y el aviso fue entregado el 10 de julio de 2.013, esta vez recibido por “*ÁNGELA ZAPATA*”, con la anotación de “*SI VIVE*” realizada por la empresa de correo certificado.

² Se escuchó a MARÍA ESPERANZA ECHEVERRY LÓPEZ; SILVIA HENAO HENAO; LUZ HELENA BARRERA PÉREZ; ÁLVARO OLAYA PELÁEZ; MARÍA LIVIA PÉREZ OSPINA; JOHN AUGUSTO FLÓREZ TRUJILLO; LEÓN DARÍO BELLO PARIAS; y, GERMÁN GONZALO GONZÁLEZ ECHEVERRI. Folios 31-46 y 51-62 del Cuaderno N° 4, correspondiente a la nulidad propuesta por LAURA ALICIA LAVERDE DE BOTERO.

Que tanto el citatorio como el aviso fueron diligenciados correctamente, todo ello verificado por el juzgado de conocimiento, sin que se pueda desconocer que a esa misma dirección se envió el citatorio a LAVERDE DE BOTERO, para que compareciera a notificarse de la Resolución Rectoral N° 31702 del 10 de febrero de 2.011, y cuya notificación personal se llevó a cabo el día 16 de ídem mes y año.

Que de los documentos allegados no se desprende que la ejecutante conociera del cambio de residencia de la ejecutada, donde el hecho de anotar la dirección en una lista de asistentes a un evento, y el que los testigos indicaran que esta vive en el Retiro, no es prueba suficiente para señalar que el lugar de notificación no corresponde a su domicilio, como tampoco lo es la enajenación de un inmueble, pues ello denota titularidad de derechos reales y no el domicilio o residencia de una persona, siendo una carga desproporcionada que después de contar con resultados positivos en la notificación, la demandante tenga que precaver cambios de direcciones o estarse a informaciones suministradas de manera informal en reuniones sociales (folios 91-95 cuaderno nulidad).

La señora LAVERDE DE BOTERO apeló la anterior decisión, insistiendo en los argumentos de su escrito inicial, para lo que señaló que la notificación personal y por aviso se realizaron en un domicilio que no era el suyo, lo que probó con los testimonios y documentos allegados, precisando que no eran fiestas sino en reuniones de carácter institucional de la UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA, ello en octubre de 2.011, mucho antes de la presentación de la demanda que fue el 20 de febrero de 2.012.

Que no hubo pronunciamiento frente a la incompleta documentación que se le envió, iterando que en las citaciones no se aportó el auto

inadmisorio, el escrito de subsanación, y la segunda página del mandamiento de pago (folios 99-107 y 111-119).

Por lo anterior, y tratándose de providencia apelable según el artículo 321.6 del C. G. del P.³, se resuelve la alzada, previas;

CONSIDERACIONES

El recurso de apelación tiene como objetivo que se estudie lo decidido en primera instancia, con el fin de revocarlo o reformarlo, sentido en el cual se dirigirá el siguiente análisis dentro del principio de la limitación, donde el problema jurídico a resolver gira en torno a establecer si se configuró o no la nulidad deprecada, en el sentido si el acto de comunicación primigenio fue o no acorde a derecho.

De cara al tema de nulidades ha de decirse que las causales son taxativas⁴, es decir, no son otras que las previstas expresamente en la ley, donde la oportunidad de alegarlas es en “... *cualquiera de las instancias antes de que se dicten sentencia o con posterioridad a ésta, si ocurrieren en ella.*” (art. 134 C. G. del P.).

En tales términos, la petición de nulidad en estudio se fundamenta en un error relacionado con la vinculación a este trámite procesal de la

³ El recurso de apelación fue concedido vía queja, la que fue resuelta por esta Sala en auto del 31 de agosto de 2021.

⁴ Sobre el punto, la Corte Constitucional, ha dicho: “... *La naturaleza taxativa de las nulidades procesales se manifiesta en dos dimensiones: En primer lugar, de la naturaleza taxativa de las nulidades se desprende que su interpretación debe ser restrictiva. En segundo lugar, el juez sólo puede declarar la nulidad de una actuación por las causales expresamente señaladas en la normativa vigente y cuando la nulidad sea manifiesta dentro del proceso*” (Sentencia T-125/10).

señora LAVERDE DE BOTERO, conforme la causal 8ª del artículo 133 del C. G. del P.⁵, norma que reza:

“El proceso es nulo, en todo o en parte, solamente en los siguientes casos: ... 8. Cuando no se practica en legal forma la notificación del auto admisorio de la demanda a personas determinadas, o el emplazamiento de las demás personas aunque sean indeterminadas, que deban ser citadas como partes, o de aquellas que deban suceder en el proceso a cualquiera de las partes, cuando la ley así lo ordena, o no se cita en debida forma al Ministerio Público o a cualquier otra persona o entidad que de acuerdo con la ley debió ser citado.”

La teleología de tal supuesto es que la notificación es un acto procesal necesario y elemental para proteger las garantías del debido proceso, punto del que la Corte Constitucional ha referido;

“(...) la debida notificación es un ejercicio judicial que se deriva del respeto al principio de publicidad. Este principio, como lo definió la sentencia C-980 de 2010, tiene la finalidad de garantizar el conocimiento de la existencia de un proceso o actuación judicial, de tal manera que asegure a las partes el ejercicio pleno del derecho de defensa, contradicción e impugnación. Desde ese punto de vista, entonces, la notificación, más que pretender formalizar la comunicación del inicio y desarrollo de una determinada actuación, lo que busca es legitimar las decisiones de las autoridades jurisdiccionales y proteger las garantías procesales intrínsecamente relacionadas con el derecho a la defensa”. (Sentencia T 397 de 2015.).

Valga anotar que el artículo 290 del C. G. del P., en su parte pertinente, dispone:

“Deberán hacerse personalmente las siguientes notificaciones: 1. Al demandado o a su representante o apoderado judicial, la del auto admisorio de la demanda y la del mandamiento ejecutivo...”

⁵ Tal supuesto normativo, reza: *“El proceso es nulo, en todo o en parte, solamente en los siguientes casos: ... 8. Cuando no se practica en legal forma la notificación del auto admisorio de la demanda a personas determinadas, o el emplazamiento de las demás personas aunque sean indeterminadas, que deban ser citadas como partes, o de aquellas que deban suceder en el proceso a cualquiera de las partes, cuando la ley así lo ordena, o no se cita en debida forma al Ministerio Público o a cualquier otra persona o entidad que de acuerdo con la ley debió ser citado.”*

En el asunto que nos ocupa, la carga procesal de notificar a las demandadas, quedó clara desde el numeral 3° del auto que libró mandamiento de pago (folio 43 principal), por lo que la ejecutante empezó las diligencias propias del enteramiento en relación a la codemandada LAVERDE DE BOTERO, lo que se hizo en la dirección denunciada desde la demanda, esto es, la “*Carrera 43 # 14-30, apartamento 201, Medellín*”⁶, la que según la solicitud de medidas cautelares corresponde al inmueble ubicado en el Conjunto Residencial Flamingo Real P.H. (Matrícula Inmobiliaria 001-515558), y del cual aquella era propietaria del 50%⁷.

A tal ubicación la parte actora, en varias ocasiones, envió la citación para notificación personal, obteniéndose el 14 de junio de 2.013 resultado positivo, siendo la persona que recibió; “FERMIN HERNANDEZ”, tal como consta a folios 79-81 principal.

Transcurrido el término para comparecer al juzgado, cinco días, se continuó con la notificación por aviso, la que también fue positiva pues la comunicación fue recibida el 10 de julio de 2.013 por “ANGELA ZAPATA” (folios 85-87 principal), situación que en principio no parece anormal tratándose de una propiedad horizontal, y en todo caso, a la luz del numeral 6° del artículo 291 del C. G. del P.;

“Cuando el citado no comparezca dentro de la oportunidad señalada, el interesado procederá a practicar la notificación por aviso.”.

No obstante, pese a que de dichas comunicaciones se informó que tuvieron resultados positivos, la notificación no fue eficaz tal como se seguirá exponiendo, en la medida que en este tipo de asuntos, la salvaguarda de los derechos al debido proceso, contradicción y

⁶ Folio 35 cuaderno principal.

⁷ De este predio *ab initio* se deprecó su embargo, folios 1-2 Cuaderno medidas cautelares.

derecho de defensa del demandado, solo ocurre cuando este conoce efectivamente del contenido de la providencia.

En primer lugar, como se indicó, está claro que los receptores de las comunicaciones fueron “FERMIN HERNANDEZ” y “ANGELA ZAPATA”, resultado que puede obedecer a que la recepción de la correspondiente documentación fue en la portería de la unidad residencial, ya que el lugar donde se pretendió surtir la notificación está ubicado en el Conjunto Residencial Flamingo Real P.H., al punto que en uno de los envíos realizados a la codemandada LAVERDE DE BOTERO, justamente el del 24 de septiembre de 2.012, la empresa de correo certificado indicó que; *“Nombre de quien recibe”; “EFREN MUÑOZ/3783563/PORTERIA”* (folio 58 del Cuaderno Principal).

La notificación en “portería” se presume válida, así lo ha considerado la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia⁸, pero observado en su conjunto el expediente, específicamente las pruebas documentales y testimoniales que obran en el trámite de nulidad, se constata que para las fechas de los envíos la señora LAVERDE DE BOTERO ya no residía en dicho lugar, lo que hace ineficaz el trámite surtido.

En la solicitud de nulidad LAVERDE DE BOTERO dijo que desde *“febrero de 2.011”* reside en el municipio de El Retiro, exactamente en el *“kilómetro 27, vía las Palmas Cerros de Fizebad Lote 60”*, lo que logró acreditar según se expone.

⁸ Sobre el punto se ha dicho; *“La Sala no comparte la mencionada argumentación porque en casos como el presente, en el que la interesada reside o trabaja en un sitio que es común para muchas personas y en el que no es permitido el libre acceso y tiene una dependencia que se encarga de ese control, como también lo enseña la experiencia, de recibir la correspondencia dirigida a sus moradores o usuarios, la exigencia legal de la notificación se debe tener como cumplida con la entrega en la portería de la comunicación respectiva (...)”*. STC16709-2014. M.P. FERNANDO GIRALDO GUTIÉRREZ.

Todos los envíos de enteramiento fueron hechos con posterioridad a la venta que LAVERDE DE BOTERO realizara del porcentaje que le correspondía en el inmueble ubicado en la “Carrera 43 # 14 – 30, apartamento 201, Medellín”, lo cual hizo el 9 de marzo de 2.012 y que era conocido por la ejecutante.

Se dice lo anterior en la medida que de dicho apartamento, junto con sus parqueaderos y cuarto útil (matrículas inmobiliarias 001-515558, 001-515508, y 001-515527)⁹, se pidió el embargo que fue decretado mediante auto del 21 de marzo de 2.012, tal como obra a folio 53 del Cuaderno de medidas cautelares; no obstante, la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Medellín - Zona Sur, en la nota devolutiva del 16 de mayo de 2.012, expresó:

“LA CODEMANDADA, SEÑORA LAURA ALICIA LAVERDE DE BOTERO, NO ES TITULAR INSCRITA; TRANSFIRIÓ EN LOS 3 INMUEBLES, SUS DERECHOS A TÍTULO DE VENTA POR ESCRITURA 1535 DEL 16-02-2012, DE LA NOTARIA 15 DE MEDELLIN, REGISTRADA EL 09-03-2012 (ART. 681 DEL C.P.C.)”¹⁰.

Por lo anterior no se consumaron los embargos, y de lo mismo se enteró a la demandante a través de auto del 26 de junio de 2.012 (folio 81 Cuaderno medidas cautelares), situación que si bien en principio demuestra la titularidad sobre derechos reales, también era indicativo que la señora LAVERDE DE BOTERO ya no residía en dicho lugar, pues las reglas de la experiencia enseñan que cuando una persona vende su lugar de morada, lo común es que se vaya del mismo.

Refuerza tal hipótesis las declaraciones de MARÍA ESPERANZA ECHEVERRY LÓPEZ; SILVIA HENAO HENAO; LUZ HELENA BARRERA PÉREZ; ÁLVARO OLAYA PELÁEZ; MARÍA LIVIA PÉREZ

⁹ Folios 1-2; 44-46 C. N° 4.

¹⁰ Folio 79 *ejusdem*.

OSPINA; JOHN AUGUSTO FLÓREZ TRUJILLO; LEÓN DARÍO BELLO PARIAS; y, GERMÁN GONZALO GONZÁLEZ ECHEVERRI, las cuales fueron recepcionadas por el *a quo*, y que en efecto aquí fueron auscultadas.

Por ejemplo, BARRERA PÉREZ, quien ser docente de la UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA informó que;

“Lo que sé es que LAURA ALICIA, inició su trámite de jubilación, ella tenía dentro de sus proyectos irse a vivir al RETIRO, una vez se jubiló en el año 2008, ella inició la construcción de su vivienda, la cual le entregaron hacia el 2010, más o menos, y se fue a vivir al retiro, Antes vivía en el poblado, sé que era empezando la loma de Castropol, en un edificio que se llamaba Flamingo Real, no tengo la dirección. En el Poblado vivió creo que hasta finales del 2010, ella empezó el 2011 estrenando casa.” Folios 42-45 Cuaderno 4º.

Por su parte, ECHEVERRY LÓPEZ, profesora del mismo centro educativo, dijo;

“Yo conozco a LAURA ALICIA hace mucho tiempo, porque somos compañeras de trabajo y porque yo llevo 27 años con la Universidad de Antioquia, no es de mi familia. Somos solo compañera de trabajo y amigas. En el marco de esa relación yo fui varias veces a la casa de ella y yo puedo constatar de que en el año 2010, que yo estuve en la casa de ella, se estaba pasando a su nueva residencia que es la actual, en FICEBAR, en una urbanización o parcelación cuyo nombre no recuerdo. Yo he ido a esa casa, la conozco, y tengo para decir que ella vive allá.” Folios 31-35 Cuaderno 4º.

FLÓREZ TRUJILLO, también docente de la UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA comentó:

“Hasta donde yo tengo entendido la doctora Laura Alicia, se fue a vivir al Retiro, por allá del año 2010 sino estoy mal, y lo sé porque

yo tengo finca en el Retiro y una vez me la encontré y me dijo que estaba viviendo por esos lados.” Folios 57-59 Cuaderno 4º.

Los mencionados medios probatorios, además de la credibilidad que merecen dadas sus condiciones de maestros universitarios de varios años de experiencia, son coherentes entre sí en sostener que la codemandada LAVERDE DE BOTERO, entre finales del año 2.010 y comienzos del 2.011, se trasladó de vivienda pasándose a residir al municipio de El Retiro, lo que resulta significativo y debe verse en armonía con la certificación expedida el 15 de noviembre de 2.014 por la administradora de la Parcelación “Cerros de Fizebad”, que indica que aquella reside en dicho lugar *“desde el mes de Febrero de 2011”* (ver folio 12 del Cuaderno 4º).

A lo anterior se suma el hecho que en dicho sitio LAVERDE DE BOTERO recibe las publicaciones de un medio escrito de comunicación, lo que sucede, por lo menos desde el 18 de noviembre de 2.011, lo cual visto en contexto con los mencionados medios probatorios, develan un lugar de residencia determinado, el cual es diferente a donde se enviaron las comunicaciones procesales.

Tales documentales no fueron redargüidos por la demandante, quien omitió pronunciarse del traslado que se le hizo (ver folio 20 ídem).

Ciertamente a la *“Carrera 43 # 14 – 30, apartamento 201, Medellín”* se envió el citatorio para que LAVERDE DE BOTERO compareciera a notificarse de la Resolución Rectoral N° 31702 del 10 de febrero de 2.011, y que la notificación personal se llevó a cabo el día 16 de ídem mes y año, pero ello fue antes de la venta del apartamento atrás reseñada, y no resulta determinante de cara al conocimiento del proceso ejecutivo (ver folios 6-11 del Cuaderno Principal).

En tales términos, no se observa una correcta vinculación procesal de quien aquí se le resuelve la nulidad alegada, ya que la ejecutante si bien trató de enterar a la codemandada, ello se dio en un lugar que no correspondía, sin que se pueda tener la notificación como una carga desproporcionada, pues tal acto hace parte de la estructura misma del debido proceso y sus derivados derechos de defensa y contradicción.

Valga anotar que la prosperidad de la nulidad estudiada no obedece a que LAVERDE DE BOTERO informó del cambio de domicilio a la ejecutante, pues ello no quedó probado, sino porque se demostró que para las fechas en que se realizaron los envíos de notificación, aquella no residía en el lugar a que se dirigieron; es más, es cierto que la actora no tiene que estarse a informaciones suministradas de manera informal en reuniones sociales, pero sí debe propender por el correcto acto de notificación, pues el mismo garantiza el ejercicio pleno del derecho de defensa, lo que no sucedió en el asunto en estudio, y por ende se configura la nulidad que trata el artículo 133.8 del C. G. del P..

Por lo expuesto la decisión impugnada se revocará, y en su lugar quedará en firme el auto calendado el 6 de noviembre de 2.015, que declaró la nulidad de las diligencias en relación a la codemandada LAURA ALICIA LAVERDE DE BOTERO, con el fin que esta pueda ejercer sus derechos de contradicción y defensa.

Finalmente, dado que queda en firme la decisión que decretó la nulidad, resulta irrelevante aludir a las otras críticas del trámite de notificación, como es lo incompleto de los anexos de las comunicaciones.

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín;

RESUELVE

PRIMERO: REVOCAR el auto del nueve (9) de marzo de dos mil veinte (2.020), proferido por el JUZGADO TERCERO CIVIL DEL CIRCUITO DE EJECUCIÓN de Medellín, quedando en firme el auto calendado el seis (6) de noviembre de dos mil quince (2.015), que declaró la nulidad de las diligencias en relación a la codemandada LAURA ALICIA LAVERDE DE BOTERO, en los términos expuestos en la parte motiva de la presente providencia.

SEGUNDO: Ejecutoriada la presente providencia, vuelva el expediente al Despacho de origen.

Notifíquese;



JOSÉ OMAR BOHÓRQUEZ VIDUEÑAS
MAGISTRADO